



**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**PROCESO:** ORDINARIO LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL (CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA).

**DEMANDANTE:** EDUARDO RODRIGUEZ NAVARRO.

**DEMANDADO:** ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

**RADICACIÓN:** 08-001-31-05-013-2016-000158-00.

**INFORME SECRETARIAL:** Señor Juez, paso a su Despacho el presente proceso informándole que, mediante auto de 21 de abril de 2022, se ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el Superior en sentencia de 16 de noviembre de 2021 que modificó la sentencia condenatoria proferida por este Juzgado, y en la misma fecha la apoderada de la parte demandante solicitó el cumplimiento de la sentencia. Así mismo, le informo que mediante auto de 29 de junio de 2022 se liquidaron las costas del ordinario, las cuales fueron aprobadas en auto de 12 de julio de 2022. En memorial del 6 de septiembre de 2022 la parte actora solicitó que se oficiara a los bancos de la ciudad para que ponga a órdenes del Juzgado los dineros de la demandada. Por otra parte, le pongo en conocimiento que la demandante reiteró su solicitud de cumplimiento de sentencia, ante lo cual el Juzgado en auto del 22 de noviembre de 2022, profirió auto de mejor proveer en el cual ordenó oficiar a COLPENSIONES para que informara sobre los actos administrativos tendientes a cumplir la sentencia, sin recibir respuesta sobre el particular. Por otra parte, he de informarle que COLPENSIONES mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2023, informó que había consignado las costas que le fueron impuestas, frente a lo cual le manifiesto que, revisado el Portal del Banco Agrario se encuentra el título de depósito judicial No. 416010004939102, en cuantía de \$1.000.000 consignado por COLPENSIONES. Finalmente, es de anotar que los términos judiciales estuvieron suspendidos por tres días hábiles correspondientes a los días 2, 3 y 4 de mayo de 2023, así como los días 26, 27 y 28 de junio del presente año, con ocasión al cierre extraordinario ordenado con el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico mediante los Acuerdos No CSJATA23-209 y 260 de 2023, e igualmente, que la Secretaría del Juzgado, frente a la cual hubo cambio de secretario a mitad de febrero de este año, está en labores de organización para el trámite de los procesos, clasificación de la carga activa, y depuración de archivos tanto físicos como digitales, con ocasión a la restante digitalización del Juzgado frente expedientes anteriores a este pendiente por tramitar, atendiendo que entre los días 1º al 16 de junio de 2023 la Secretaría del Juzgado estuvo trabajando 100% en la adecuación de los 73 expedientes que se remitieron al Juzgado 16 Laboral del Circuito de esta ciudad en virtud de la medida de redistribución de procesos del Acuerdo CSJATA23-227 de 2023, lo que permitió el envío físico y digital de los expedientes el 16 de junio de 2023, y también, le pongo de presente que debido a algunas devoluciones que realiza la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla por carecer de gestor, el Juzgado también se encuentra realizando tareas de creación de expedientes digitales en dicha plataforma, lo que ha resultado más dispendioso de lo esperado por la complejidad del aplicativo. Sírvasse proveer.

Barranquilla, 27 de julio de 2023

MARIA B. POTES SANTODOMINGO.  
Secretaria.

**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO.** Barranquilla, veintisiete (27) de julio del año dos mil veintidós (2022).

El demandante EDUARDO RODRIGUEZ NAVARRO, por medio de apoderada judicial, solicitó se librara mandamiento ejecutivo contra COLPENSIONES.

El artículo 306 del Código General del Proceso, aplicable en esta materia por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T.S.S., en concordancia con el artículo 1 del C.G.P., ordena que la ejecución de la sentencia se haga sobre el mismo expediente en donde se dictó, caso en el cual, el mandamiento de pago se notifica al demandado mediante anotación en estado, si la solicitud se impetra dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior. Si la petición se hace



### **JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

por fuera del término antes anotado, el mandamiento de pago se notificará al demandado en la forma ordenada en el artículo 291 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 48 de la Ley 2080 de 2.021 que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2.011. En este caso, el auto de obediencia a lo resuelto por el Superior data del 21 de abril de 2.022, en tanto que, la primera solicitud de cumplimiento de sentencia fue radicada ante la Secretaría del Juzgado el 21 de abril de 2.022, esto es, dentro de los 30 días a que se refiere el artículo antes citado.

Enseña el artículo 100 del C. P. T. en armonía con el artículo 422 del C. G. P, que “Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme.” Y que “... sea clara, expresa y actualmente exigible”.

En el caso de autos, se reúnen plenamente los presupuestos exigidos por las normas antes citadas, teniendo en cuenta que el título de recaudo ejecutivo es la sentencia condenatoria proferida por este Juzgado el 30 de noviembre de 2.017, que “declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por la demandada, salvo la de prescripción frente a derechos pensionales anteriores al 14 de abril de 2.013, declaró que el actor es beneficiario del Régimen de Transición y le es aplicable el Acuerdo 049 de 1.990, condenó a la demandada COLPENSIONES a reconocer y pagar una pensión de vejez a partir del 13 de octubre de 1.993, exigible a partir del 14 de abril de 2.023 por efectos de la prescripción declarada en monto igual al salario mínimo, autorizando el descuento del 12% por concepto de aportes de seguridad social en salud, condenó a la demandada COLPENSIONES a reconocer y pagar intereses moratorios sobre el importe de mesadas causadas e impagadas a partir del 5 de junio de 2015 a la tasa más alta de interés moratorio”, decisión que fue modificada por la Sala Dos de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en sentencia del 16 de noviembre de 2.021 en el sentido de disponer que el retroactivo pensional acumulado (abril 2013 a noviembre de 2017) a favor del demandante asciende a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ML (\$42.378.924,00), e igualmente adicionada en el sentido de autorizar a COLPENSIONES a descontar del retroactivo pensional a pagar lo pagado por indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en la suma de \$2.470.580,00, debidamente indexada al momento del descuento, y la confirmó en lo demás, sin imponer costas en segunda instancia, más la condena en costas de primera instancia a cargo de la demandada que se liquidó y aprobó en UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000),00, conforme el auto del 12 de julio de 2.022.

Es por ello que, a fecha de hoy ya habiendo transcurrido el plazo de los 10 meses señalados en el artículo 307 del C.G.P, en cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y obediendo a que se encuentran reunidos, como se encuentran los requisitos legales del título ejecutivo, por contener la sentencia una obligación clara, líquida y actualmente exigible al demandante, teniendo en cuenta que el auto de obediencia de fecha 21 de abril de 2022, se notificó por estado de 25 de abril de 2022, es del caso dictar orden de pago a favor del demandante, señor EDUARDO RODRIGUEZ NAVARRO, por concepto de pensión de vejez a partir del 14 de abril de 2.013 en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, cuyo retroactivo entre abril de 2013 y noviembre de 2017, asciende a la suma de \$42.378.924,00, más los intereses moratorios sobre las mesadas impagadas a partir del 5 de junio de 2015, a la tasa más alta de interés moratorio que certifique la Superfinanciera a la fecha del pago de la obligación, de lo cual se debe descontar la suma de \$2.470.580, debidamente indexada al momento del descuento, así como los aportes en seguridad social en salud. En cuanto al valor de las costas procesales por \$1.000.000,00, estas no se incluirán en el mandamiento de pago toda vez que conforme el informe secretarial fue consignado por la demandada.

Por otro lado, en memorial de 6 de septiembre de 2022, la parte demandante solicitó que se librara oficios a las entidades bancarias BANCOLOMBIA, AV VILLAS, BBVA,



**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

BANCO DE OCCIDENTE, BANCO DAVIVIENDA y BANCO DE BOGOTÁ, con la finalidad de que colocara a órdenes del Juzgado los dineros correspondientes al mandamiento de pago.

Frente a la anterior solicitud, debe tenerse en cuenta lo expresado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero del año 2003, expediente 19508. M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sobre la naturaleza jurídica de los dineros recaudados por el extinto I.S.S. hoy COLPENSIONES, donde sostuvo:

*“Los recursos para el pago de las prestaciones que se originan en el Sistema General de Pensiones son de carácter parafiscal como lo ha enseñado la doctrina.*

*Uno de los elementos esenciales de la parafiscalidad es la de que esta clase de recursos constituyen un patrimonio de afectación, esto es, que los bienes que lo integran han de destinarse a la finalidad que la ley les señala en el momento de su creación; así, los fondos constituidos con las cotizaciones o los aportes que efectúan por mandato de la ley, el Estado o los particulares, a cualquiera de los regímenes de pensiones, han de consagrarse exclusivamente a pagar las prestaciones del servicio de la seguridad social en pensiones, como lo determina el artículo 283 de Ley 100 de 1993.*

*De los patrimonios de afectación no puede predicarse propiedad –solo anti técnicamente- por cuanto nadie puede ejercer el poder de libre disposición sobre ellos. Por esta razón es que las normas de la Ley 100 de 1993 que regulan el Fondo de Solidaridad Pensional (artículo 25) o el régimen de prima media con prestación definida, (artículo 52) o el de ahorro individual con solidaridad (artículo 90), sólo le otorgan el carácter de administradoras a las entidades a las que se le confía la gestión de los recursos.*

*Así entonces, el fondo económico del que proviene el pago de las pensiones de vejez, de invalidez o de sobrevivientes aunque esté radicado en cabeza del Instituto de los Seguros Sociales, no es propiedad suya, sino que éste es sólo administrador de aquellos.”*

Ahora bien, pese a que del análisis de los artículos 17, 93 y 129 del Decreto 1650 de 1.977, artículos 2 y 26 de la Ley 38 de 1.989, artículo 41 de la Ley 179 de 1.994, los artículos 134 y 137 de la Ley 100 de 1.993, y el numeral 1° del artículo 594 del C.G.P. se llega a la inexorable conclusión de que en términos generales existen recursos del patrimonio de COLPENSIONES que son de carácter de inembargables sobre todo si se trata de aquellos que son girados directamente a través del Presupuesto General de la Nación y por ende sus bienes están involucrados en el mismo, no es menos cierto, que el artículo 19 del Decreto 111 de 1996 además de indicar que son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman, señala que *“los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetaran en su integridad los derechos reconocidos a terceros con estas sentencias”*, y que en materia de procesos ejecutivos laborales, de manera excepcional tal como lo ha manifestado la Honorable Corte Constitucional<sup>1</sup>, en casos como el sub-examine procede el embargo y la posterior entrega al demandante de aquellos dineros del COLPENSIONES que gozan del beneficio de inembargabilidad en el evento de que las cuentas bancarias de libre destinación o previstas para el pago de sentencias condenatorias, conciliaciones y transacciones del ente de seguridad social demandado no fueren suficientes para cubrir la obligación laboral que consta en un título claro, expreso y exigible, o que tal entidad carezca de dichas cuentas, toda vez que se trata de créditos del orden laboral y de la seguridad social, reconocidos y representados como títulos en sentencias judiciales, que precisamente tienen por objeto la satisfacción y pago de derechos pensionales, los cuales se acompañan con la destinación de los dineros que posee COLPENSIONES para el pago de las pensiones que reconoce, es decir opera la excepción constitucional a la inembargabilidad de los recursos del demandado en defensa de los derechos fundamentales del trabajador o pensionado que últimas constituye uno de los fines del Estado Social de Derecho Colombiano, esto es, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política (Art. 2 C.P.), en razón a que las acreencias laborales

<sup>1</sup> Ver entre otros fallos de la Corte Constitucional, las sentencias C-192 de 1.995 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-566 de 2.003 M.P. Alvaro Tafur Galvis y T-1195 de 2.004 M.P. Jaime Araujo Rentería.



**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

no fueron canceladas por la entidad pública en el término de Ley con los recursos del presupuesto destinado para tal fin.

En efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada, esgrimió:

“(…)

*El principio de inembargabilidad presupuestal pretende hacer efectivo el postulado de la prevalencia del interés común sobre el particular.*

*No obstante lo anterior, el Estado no puede hacer caso omiso de las obligaciones de contenido laboral por él contraídas.*

*Por tanto, esta Corporación ha sostenido que en el evento de existir créditos laborales insolutos por parte de las entidades públicas, la inembargabilidad de los recursos públicos sufre una excepción de naturaleza constitucional.*

“(…)

*En conclusión, esta Corporación reconoce que el principio de inembargabilidad de los recursos públicos se cimienta en la protección de la prevalencia del interés colectivo general, que en últimas se dirige al cumplimiento de los fines propios del Estado Social de Derecho.*

*Con lo anterior, no se quiere decir que la multicitada inembargabilidad de los recursos públicos sea absoluta, por el contrario, tratándose de acreencias laborales tal principio se quiebra y la protección del interés general debe ceder frente a la protección de los derechos fundamentales de aquellos trabajadores que se han visto afectados por el no pago de sus salarios y prestaciones sociales”.*

**<Sentencia T-1195 de 2004, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería>** (Subraya fuera de texto).

Conforme lo anterior se colige, que los recursos administrados por el Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES no son de propiedad de éste, pues los mismos provienen de los aportes de Seguridad Social, y rendimientos de las reservas en los casos de Pensiones. En consecuencia, los mismos se encuentran bajo su administración, con el fin de lograr el pago de las prestaciones de sus afiliados.

De igual manera resulta evidente que en este caso opera la excepción al principio de inembargabilidad por tratarse de acreencias laborales de índole pensional, lo que conlleva inexorablemente a decretar el embargo y retención preventiva de los dineros de propiedad de la demandada previstos para la libre destinación o el pago y rubro de sentencias, transacciones y conciliaciones, o en caso de no existir ni ser suficientes serán las correspondientes a destinación específica tales como gastos de administración o en su defecto las de los fondos de reparto de régimen de prima media y su respectiva reserva que se traduce en la destinada para el pago de pensiones, atendiendo las Sentencias C-192/95 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-566 de 2.003 M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-1195 de 2.004 M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otras proferidas por la Corte Constitucional.

Por las razones anteriormente expuestas y habiéndose juramentado en legal forma el apoderado de la demandante, el Juzgado procederá a librar mandamiento de pago y decretar los embargos solicitados con las previsiones mencionadas, limitándolo hasta por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$90.000.000.00).

Así mismo, en consideración a lo anterior respecto a la notificación de los autos de obediencia y cumplimiento a lo resuelto por el Superior y la data de la solicitud primigenia de cumplimiento de sentencia, se notificará la notificación de este proveído a la ejecutada por estado, de conformidad con el artículo 306 del C.G.P., aplicable por integración normativa en materia laboral (artículo 145 C.P.T.S.S.), y se ordenará correrle traslado por el término de diez (10) días de la petición de cumplimiento de sentencia.

En merito a lo expuesto, el Juzgado,

**RESUELVE:**





**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**PRIMERO: LIBRAR** mandamiento de pago a favor del demandante, EDUARDO RODRIGUEZ NAVARRO, y en contra de la demandada COLPENSIONES, por concepto de pensión de vejez a partir del 14 de abril de 2013 en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, cuyo retroactivo entre abril de 2013 y noviembre de 2017, asciende a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ML (\$42.378.924,00), más los intereses moratorios sobre las mesadas impagadas a partir del 5 de junio de 2015, a la tasa más alta de interés moratorio que certifique la Superfinanciera a la fecha del pago de la obligación, de lo cual se debe descontar la suma de \$2.470.580, debidamente indexada al momento del descuento, así como los aportes en seguridad social en salud.

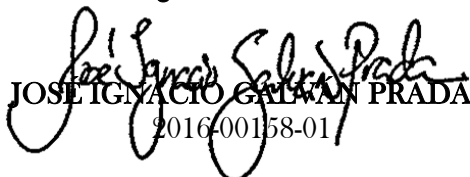
**SEGUNDO: DECRETESE** el embargo y retención preventiva de los dineros de propiedad de la demandada COLPENSIONES con NIT. 900-336004-7, que se encuentran depositados en las cuentas de BANCOLOMBIA, AV VILLAS, BBVA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO DAVIVIENDA y BANCO DE BOGOTÁ, previstos para la libre destinación o el pago y rubro de sentencias, transacciones y conciliaciones, o en caso de no existir ni ser suficientes serán las correspondientes a destinación específica tales como gastos de administración o en su defecto las de los fondos de reparto de régimen de prima media y su respectiva reserva que se traduce en la destinada para el pago de pensiones, en atención a la excepción del principio de inembargabilidad por tratarse de acreencias laborales en materia pensional y atendiendo las Sentencias C-192/95 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-566 de 2.003 M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-1195 de 2.004 M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otras, proferidas por la Corte Constitucional. Limitando el embargo hasta la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$90.000.000,00). Líbrese el oficio respectivo.

**TERCERO: CONCEDASE** a la ejecutada un término de cinco (5) días para que pague con los valores contenidos en la sentencia título de recaudo ejecutivo.

**CUARTO: NOTIFÍQUESE** este proveído a la ejecutada por estado y córrasele traslado por el término de diez (10) días de la petición de cumplimiento de sentencia.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**EL JUEZ,**

  
JOSE IGNACIO GALVAN PRADA  
2016-00158-01

Juzgado 13 Laboral Del Circuito de Barranquilla  
Día 02 Mes 08 Año 2023  
Notificado por el Estado N° 0112  
La Providencia de fecha Día 27 Mes 07 Año 2023  
La Secretaria María B Potes Santodomingo